(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA)
(19 DE JUNIO DE 2012)

GOBIERNO DE PUERTO RICO

16ta. Asamblea
Legislativa

4ta. Sesión
Ordinaria

CAMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 2883

22 DE SEPTIEMBRE DE 2010

Presentado por la representante *Fernández Rodríguez*

Referido a la Comisión de Lo Jurídico y de Etica

LEY

Para enmendar el inciso (b)(5) del Artículo 24 de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, conocida como "Ley de Menores de Puerto Rico", a fin de establecer que la pena especial ingresada al fondo instituido por la Ley 183-1998, según enmendada, conocida como "Ley para la Compensación a Víctimas de Delito", se impondrá tal como se dispone en el Artículo 67 de la Ley 149-2004, según enmendada, conocida como "Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", o cualquier otra legislación que tenga el efecto de sustituir el referido Código.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, conocida como "Ley de Menores de Puerto Rico", respondió a la visión imperante sobre los procesos de justicia juvenil, los cuales según la parte expositiva de dicha Ley, habían sido ampliamente criticados debido a la atención y tratamiento que recibían los menores delincuentes o transgresores en las instituciones de custodia. Además, se entendía que los procedimientos utilizados en los procesos de menores habían sido variados y no uniformes, cuestionándose así la discreción que se había conferido a las autoridades judiciales y policíacas, así como de las agencias que brindaban servicios a los menores de edad.

Ante dicha realidad, se optó por acoger el marco filosófico humanista para el Sistema de Justicia Juvenil. Bajo esta visión ideológica, convergen dos (2) intereses principales: (1) la rehabilitación; y (2) el poder y responsabilidad inherente del Estado de proveer todas las oportunidades que viabilicen la rehabilitación a los menores. Paralelamente a estos principios, se les exige a los menores, cierto grado de responsabilidad para dirigir sus actos, y por consiguiente, responder por sus actos independientemente de sus consecuencias. En atención a los requerimientos establecidos para los menores, se incorporaron las garantías de juicio justo, rápido y eficaz en los procesos de justicia, sin que esto conlleve en sí, el carácter especial esencial en los procesos en los que menores estén involucrados.

Finalmente, la Ley de Menores de Puerto Rico proveyó alternativas que permitieren utilizar recursos fuera de la vía judicial para brindar atención de manera oportuna a los transgresores de la ley. Todo lo anterior, en pro de lograr la rehabilitación de los menores de edad al hacerlos conscientes sobre la relevancia de la falta que cometieron, sus consecuencias, la responsabilidad individual y comunitaria, así como propiciar el respeto y cumplimiento de las leyes que rigen la sociedad.

Por otra parte, el Gobierno de Puerto Rico estableció a través de la Ley 183-1998, según enmendada, conocida como "Ley para la Compensación a Víctimas de Delito", una política pública dirigida a reconocer como una prioridad la protección de la ciudadanía. Para lograr la consecución de dicho fin, se entendió indispensable fomentar la cooperación y la participación de la comunidad, a fin de esclarecer y procesar a todas las personas alegadamente responsables de algún hecho delictivo.

La finalidad del Gobierno al aprobar dicha legislación fue ampliar los derechos de las víctimas de delito, en atención a las transgresiones e inconvenientes sufridos como consecuencia directa de actos criminales cometidos en su contra. Consecuentemente, se proveyó una compensación monetaria a las víctimas de determinados delitos que sufran algún daño corporal, enfermedad o hasta la muerte, como resultado de los actos o conducta delictiva. Cabe mencionar que, los beneficios conferidos mediante las normas incluidas en la Ley 183, *supra*, se extienden a aquellas personas que sufran daño o mueran al ser atacadas por evitar o tratar de evitar la comisión de un delito, al capturar o tratar de capturar a un sospechoso de la comisión de un delito o al ayudar o tratar de ayudar a un funcionario del orden público a llevar a cabo un arresto.

Lo anterior responde al interés de asistir en la reconstrucción de las vidas que fueron tocadas por la criminalidad, ello *vis a vis* el incremento de la comisión de delitos en la Isla, mientras se salvaguardan los derechos de los acusados para lograr la justicia. Dentro del impacto que sufren las familias de las víctimas de delito se enumeran las siguientes mientras se dilucida el proceso judicial: falta de recursos; los gastos de viaje, alimentos y alojamiento; las ausencias no compensadas del área de trabajo; los gastos

médicos y de funeral. Todo lo antes descrito contribuye a que el proceso investigativo, el proceso criminal, así como la recuperación posterior, sean procesos angustiosos y frustrantes para las víctimas. Por consiguiente se pretendió brindar un aliento a las víctimas y sus familiares con la aprobación de la Ley 183, *supra*, así como garantizarles a las víctimas que, durante el procesamiento criminal de su agresor, tendrán el apoyo y la asistencia necesaria de manera que su entrada al sistema de justicia criminal no constituya un trauma adicional.

Por último, es menester mencionar que la Ley 183, *supra*, fue enmendada por la Ley 196-2003 con el motivo de, entre otras cosas, incluir dentro de su normativa las faltas y tentativas de delitos como causa para que las víctimas obtengan compensación por los daños obtenidos, aunque el victimario fuere una persona menor de edad. Ello, al añadirse un nuevo inciso (b)(5) al Artículo 24 de esta última Ley, de modo que cuando el tribunal halle a un menor incurso en falta y le impusiere una medida dispositiva condicional, pudiese ordenársele el pago de la pena especial establecida en el Artículo 49-C del Código Penal de 1974, en los casos elegibles de compensación a víctimas indicados por la Ley 183, *supra*. Sin embargo, debido a que el mencionado Código Penal fue derogado por el actual, aprobado en el 2004 y posteriormente enmendado, consideramos indispensable rectificar tal referencia al Código Penal derogado, para que el inciso (b)(5) del Artículo 24 de la Ley Núm. 88, *supra*, aluda propiamente al Artículo 67 del Código Penal de Puerto Rico de 2004, según enmendado.

Conforme a los planteamientos antes expresados, esta Asamblea Legislativa entiende que se debe enmendar la Ley Núm. 88, *supra*, conocida como la “Ley de Menores de Puerto Rico”, con el fin de tener disponible en el caso de menores de edad, la imposición de la pena especial a ingresarse al fondo para la víctimas de delito, según dispuesto por la Ley 196, *supra*. Asimismo, se enfatiza que esta normativa se mantendrá vigente aún cuando el actual Código Penal fuere derogado.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Artículo 1.-Se enmienda el inciso (b)(5) del Artículo 24 de la Ley Núm. 88 de 9 de
2 julio de 1986, según enmendada, para que se lea como sigue:

3 “Artículo 24.-Imposición de Medidas Dispositivas al Menor Incurso en

4 Falta

1   Cuando el Tribunal hubiere hecho una determinación de que el menor ha
2   incurrido en falta podrá imponer cualquiera de las siguientes medidas
3   dispositivas:

4   (a) ...

5   (b) Condicional.-Colocar al menor en libertad ha prueba en el hogar de
6   sus padres o en el de otra persona adecuada exigiéndole cumplir
7   con una o más de las siguientes condiciones:

8   (1) ....

9   (2) ...

10   (3) ...

11   (4) ...

12   (5) Ordenarle al menor a pagar la pena especial establecida por
13   el Artículo 67 de la Ley 149-2004, según enmendada,
14   conocida como 'Código Penal del Estado Libre Asociado de
15   Puerto Rico' o cualquier otra legislación que tenga el efecto
16   de derogar dicho Código Penal y sustituir su normativa
17   legal, para aquellas conductas delictivas descritas en el
18   Artículo 7 de la Ley Núm. 183 de 29 de julio de 1989, según
19   enmendada, conocida como "Ley de Compensación a
20   Víctimas de Delitos". El tribunal podrá eximir al menor del
21   pago de la pena especial en casos de faltas de cualquier tipo,
22   de cumplirse con los requisitos para eximir del pago de la

1 pena especial en delitos graves establecidos en el Artículo
2 49-C de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974.

3 (6) ...

4 (c) ...

5 (1) ...

6 (2) ...

7 (3) ...”

8 Artículo 2.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.